

1349

PARTE 2



RESEÑA LEGISLATIVA

ISSN 0717-0416

Nº 1349

14 de Septiembre de 2018

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO SOLIDARIO (EX CAE)

BOLETÍN 11822-04

VOLUMEN II

RESEÑA LEGISLATIVA es una publicación de
LIBERTAD Y DESARROLLO
DIRECTOR RESPONSABLE: Luis Larraín A.
EDITOR: Pablo Kangiser G.
DIRECCIÓN: Alcántara 498, Las Condes, Santiago,
Chile.



RESEÑA LEGISLATIVA

Nº 1349

14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ÍNDICE

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO SOLIDARIO (EX CAE)

BOLETÍN 11822-04

VOLUMEN I

OPINIÓN EJECUTIVA	4
CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY	5
COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL	12

VOLUMEN II

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY	19
ARTÍCULOS TRANSITORIOS.....	43
ANEXO I -Artículos de la Ley de Impuesto a la Renta.....	48
ANEXO II -Artículos de la Ley sobre Educación Superior	58
ANEXO III -Artículos del Código del Trabajo	61

TEXTO DEL **PROYECTO DE LEY**

“TITULO I

Del Sistema de Financiamiento Solidario para Estudiantes de la Educación Superior.

§ 1. NORMAS GENERALES.

Artículo 1°.- Sistema de Financiamiento Solidario. Créase un sistema de financiamiento solidario (SIFS) destinado a los estudiantes del nivel de educación superior, en adelante el “Crédito”, cuya finalidad es la de contribuir en el financiamiento del arancel de carreras o programas de estudios presenciales conducentes a los títulos y grados señalados en los literales a), b) y c) del artículo 54¹³ del Decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, en instituciones de educación superior. Este Crédito será otorgado por una sociedad anónima del Estado, en adelante la “Administradora”, a que se refiere el Título V de esta ley, debiendo darse cumplimiento, por parte de los estudiantes y de las instituciones, a los requisitos señalados en la presente ley.

Adicionalmente, esta ley establece la obligación de las instituciones de educación superior de entregar financiamiento por el remanente del arancel real que no alcance a ser cubierto por este Crédito y otras becas de arancel que sean entregadas por el Estado. Esta obligación sólo es exigible respecto de

13 Letras a), b) y c), del artículo 54°, vigentes:

Art. 54.

- a) El título de técnico de nivel superior es el que se otorga a un egresado de un centro de formación técnica o de un instituto profesional que ha aprobado un programa de estudios de una duración mínima de mil seiscientos clases o cuatro semestres, que le confiere la capacidad y conocimientos necesarios para desempeñarse en una especialidad de apoyo al nivel profesional.
- b) El título profesional es el que se otorga a un egresado de un instituto profesional o de una universidad que ha aprobado un programa de estudios cuyo nivel y contenido le confieren una formación general y científica necesaria para un adecuado desempeño profesional.
- c) El grado de licenciado es el que se otorga al alumno de una universidad que ha aprobado un programa de estudios que comprenda todos los aspectos esenciales de un área del conocimiento o de una disciplina determinada.

estudiantes de hogares pertenecientes a los seis deciles de menores ingresos de la población y que obtengan el máximo de Crédito al que puedan acceder.

Artículo 2°.- Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

- a) **Crédito:** Empréstito otorgado por una sociedad anónima del Estado a un estudiante que cursa una determinada carrera o programa de estudios impartido por una institución de educación superior, para el financiamiento del arancel, y cuyo monto se transfiere directamente a la institución respectiva.
- b) **CAE:** El crédito de educación superior con garantía estatal regulado en la ley N° 20.027¹⁴.
- c) **Beneficiario o deudor:** Aquella persona que cumpla con los requisitos del artículo 9 y que suscriba los documentos de otorgamiento del Crédito creado por la presente ley. Se considerará deudor, además, al empleador en los casos a que se refiere el párrafo 5 del Título III.
- d) **Deudor moroso:** Aquel beneficiario o empleador en los casos a que se refiere el párrafo 5 del Título III, que tenga una o más cuotas vencidas y no pagadas del Crédito.
- e) **Instituciones de Educación Superior:** Aquellas instituciones contempladas en el artículo 52¹⁵ del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación y que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley.
- f) **Deserción:** Incurre en deserción el estudiante que, sin causa justificada, no se matricula durante tres semestres consecutivos.

Un reglamento definirá los casos que constituyan causa justificada. Con todo, el período de 6 semanas anteriores al parto de una estudiante beneficiaria del Crédito y las 12 semanas posteriores a aquel, se entenderá siempre como causa justificada y no podrá tomarse en cuenta para contabilizar el periodo de deserción.

14 Ley N° 20.027, que Establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior.

15 Artículo 52°, vigente:

Art. 52. El Estado reconocerá oficialmente a las siguientes instituciones de educación superior:

- a) Universidades;
- b) Institutos profesionales;
- c) Centros de formación técnica, y
- d) Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos; Academias de Guerra y Politécnicas; Escuelas de Armas y Especialidades de las Fuerzas Armadas; Escuela Técnica Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil; Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile; Escuelas Matrices de Oficiales de las Fuerzas Armadas; Escuela de Carabineros y Escuela de Suboficiales de Carabineros de Chile, la Escuela de Gendarmería de Chile; y Escuela de Investigaciones Policiales e Instituto Superior de la Policía de Investigaciones de Chile.

- g) **Arancel real:** Valor anual de una carrera o programa de estudios determinado, fijado por una institución de educación superior. No incluye el derecho básico de matrícula.
- h) **Arancel regulado:** Valor referencial anual de una carrera o programa de estudios determinado, establecido por el Ministerio de Educación según el procedimiento señalado en el párrafo 2° del Título V¹⁶ de la ley N° 21.091 sobre Educación Superior.
- i) **Brecha:** Diferencia resultante de restar al valor del arancel real, el valor del arancel regulado.
- j) **Remanente:** Saldo del arancel real que no se encuentra cubierto por el Crédito y las becas de arancel estatales.
- k) **La Administradora:** Sociedad anónima del Estado que otorga y administra el Crédito, a que se refiere el Título V de esta ley.
- l) **Ingresa:** Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores creada por la ley N° 20.027¹⁷.

Artículo 3.- Acreditación Socioeconómica de los Estudiantes. El Ministerio de Educación, para la determinación de los deciles señalados en el inciso tercero del artículo 4 y en el numeral 2 del artículo 9, utilizará el instrumento establecido en el artículo 5¹⁸ de la ley N° 20.379, pudiendo considerar los datos recopilados mediante el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS).

16 El párrafo 2° establece los valores regulados de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación. El Título V regula el financiamiento institucional para la gratuidad.

17 Ley N° 20.027 que Establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior.

18 Artículo 5°, vigente:

Artículo 5°.- El Sistema (Sistema Intersectorial de Protección Social) contará con un instrumento que permita la caracterización socioeconómica de la población nacional, según lo establezca un reglamento expedido a través del Ministerio de Planificación, suscrito, además, por el Ministro de Hacienda. Dicho instrumento deberá considerar, entre otros, factores de caracterización territorial. El reglamento normará la administración del proceso de encuesta a nivel nacional y comunal; establecerá el diseño, uso y formas de aplicación del referido instrumento de caracterización; el tratamiento de datos personales de acuerdo a la normativa aplicable, y la supervisión de la aplicación y uso del mencionado instrumento de caracterización. La administración de este instrumento estará a cargo del Ministerio de Planificación.

El que proporcione, declare, entregue o consigne información falsa durante el proceso de encuesta para la aplicación del instrumento de caracterización socioeconómica, será sancionado con una multa de hasta veinte unidades tributarias mensuales, la que será aplicada por el juez de policía local competente. El producto de ella irá en beneficio de la municipalidad correspondiente.

Los funcionarios públicos o municipales deberán respetar la confidencialidad de la información a la que tengan acceso, estando prohibida su adulteración o difusión no autorizada por el Ministerio de Planificación, así como la consignación de información falsa durante el proceso de encuesta. La infracción de esta disposición se estimará como una vulneración grave al principio de probidad administrativa y será sancionada en conformidad a la ley.

§ 2. CARACTERÍSTICAS DEL CRÉDITO.

Artículo 4.- Monto. El monto del Crédito se expresará en unidades tributarias mensuales (UTM), y será otorgado a los beneficiarios en su equivalente en pesos, moneda de curso legal, en los términos establecidos en esta ley, hasta por el monto total del arancel regulado de la carrera o programa de estudios en que esté matriculado el estudiante, más un porcentaje variable de la brecha.

El monto mínimo del Crédito será el equivalente a 5 UTM, y el monto máximo será equivalente al valor del arancel real de la carrera o programa de estudios correspondiente, o uno coma cinco veces el valor del arancel regulado correspondiente, cualquiera sea menor.

La cobertura del Crédito para la brecha estará determinada por la clasificación socioeconómica del estudiante al momento de suscribir el contrato de Crédito correspondiente, según el decil socioeconómico de su hogar, y por el nivel de acreditación de la institución de educación superior, según la ley N° 20.129¹⁹, que imparta la carrera o programa de estudios así financiado, de acuerdo al cuadro siguiente:

Decil socioeconómico	Acreditación de excelencia	Acreditación avanzada	Acreditación básica
I	90% de la brecha.	80% de la brecha.	70% de la brecha.
II	90% de la brecha.	80% de la brecha.	70% de la brecha.
III	90% de la brecha.	80% de la brecha.	70% de la brecha.
IV	90% de la brecha.	80% de la brecha.	70% de la brecha.
V	70% de la brecha.	60% de la brecha.	50% de la brecha.
VI	70% de la brecha.	60% de la brecha.	50% de la brecha.
VII	60% de la brecha.	50% de la brecha.	40% de la brecha.
VIII	60% de la brecha.	50% de la brecha.	40% de la brecha.
IX	50% de la brecha.	40% de la brecha.	30% de la brecha.

19 Ley N° 20.129 que Establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el estudiante podrá solicitar al Ministerio de Educación la actualización de su situación socioeconómica acreditando nuevos antecedentes.

Artículo 5.- Interés. La deuda devengará un interés real anual del 2% a partir de la fecha de suscripción del contrato del Crédito otorgado y hasta que se extinga, según el mecanismo que define la presente ley.

§ 3. CONDICIONES DEL CRÉDITO

Artículo 6.- Proceso de solicitud y otorgamiento del Crédito a los estudiantes. El proceso de solicitud del Crédito estará a cargo del Ministerio de Educación, y el otorgamiento del Crédito estará a cargo de la Administradora a que se refiere el Título V, en conformidad a lo establecido en el reglamento, y estará regido por los principios de objetividad, no discriminación arbitraria y transparencia.

Artículo 7.- Depósito del Crédito. El Crédito otorgado al estudiante por la Administradora será depositado, durante ese mismo año, a la institución de educación superior que corresponda.

Artículo 8.- Período de otorgamiento del Crédito. El Crédito se otorgará por la Administradora y el estudiante beneficiado por éste podrá solicitar su renovación durante la duración nominal del plan de estudios de la carrera o programa de estudios que curse.

Para el caso de los programas de formación inicial general, tales como bachilleratos u otros equivalentes de conformidad a las normas vigentes, su duración nominal se deberá entender incorporada en aquella de la carrera o programa de estudios en que prosiga el estudiante.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el periodo de otorgamiento del Crédito podrá extenderse más allá de la duración nominal del plan de estudios de la carrera o programa de estudios por un máximo de tres, dos o un semestre académico, tratándose de carreras conducentes a grado de licenciado, a título profesional o título técnico de nivel superior, respectivamente.

TÍTULO II

De los requisitos para el acceso al Crédito

§ 1. DE LOS REQUISITOS DE LOS ESTUDIANTES

Artículo 9.- Requisitos para los Estudiantes. El Crédito podrá financiar las carreras o programa de estudios de los estudiantes que cumplan con los siguientes requisitos:

1. Ser chilenos o extranjeros con residencia definitiva en Chile;
2. Que su hogar pertenezca a los nueve primeros deciles socioeconómicos, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.
3. Encontrarse matriculados como alumnos regulares en carreras o programas de estudios a que se refiere el inciso primero del artículo 1 que imparta alguna de las instituciones de educación superior que califiquen de acuerdo con los requisitos señalados en el artículo 12.
4. Haber ingresado a la institución de educación superior demostrando mérito académico suficiente y mantener durante el transcurso de su carrera o programa de estudios un rendimiento satisfactorio, de acuerdo al reglamento.
5. Cumplir con los demás requisitos y obligaciones establecidos en esta ley.

Un reglamento dictado por el Ministerio de Educación y suscrito, además, por el Ministro de Hacienda, establecerá la forma y procedimiento de acreditación de los requisitos a que se refiere este artículo como asimismo el indicador objetivo de mérito académico suficiente y rendimiento satisfactorio durante la duración de la carrera o programa de estudios.

Artículo 10.- Suscripción del Contrato de Crédito. Será condición previa para acceder al Crédito, que el beneficiario se obligue a pagarlo de acuerdo con las condiciones que fija esta ley.

Para los efectos de los contratos suscritos y de las obligaciones contraídas por los estudiantes conforme a la presente ley, éstos se considerarán siempre plenamente capaces.

Para acceder al Crédito el estudiante deberá cumplir con:

1. Ajustarse al proceso de solicitud y otorgamiento del Crédito, de acuerdo con el artículo 6, el que se realizará al menos una vez al año y estará a cargo del Ministerio de Educación y de la Administradora, respectivamente, en conformidad a lo establecido en el reglamento;
2. Presentar una declaración jurada ante el Ministerio de Educación expresando que la información entregada en el proceso de solicitud es fidedigna. En caso de que la información contenida en la declaración jurada no sea fidedigna, el estudiante no podrá solicitar la renovación de su Crédito para el período siguiente; y
3. Suscribir un contrato de Crédito, el que contendrá una declaración expresa de la voluntad de someterse a las condiciones del Crédito acompañado de un pagaré a favor de la Administradora por el monto total del Crédito y una autorización facultando a ésta y a la Tesorería General de la República para que dichas instituciones informen a su futuro empleador o empleadores, de la circunstancia que su dependiente es deudor del Crédito, con el objeto de que efectúe la retención a que se refiere el artículo 31.

Los documentos que suscriban los estudiantes que den cuenta del Crédito que se les otorga de conformidad a esta ley, tendrán mérito ejecutivo por el solo ministerio de la ley y estarán exentos del pago del impuesto de timbres y estampillas.

Artículo 11.- Limitaciones para acceder al Crédito. No podrán acceder al Crédito que regula esta ley:

1. Quienes hayan egresado de carreras o programa de estudios conducentes a un título profesional o grado de licenciado de universidades de Chile o del extranjero.

Se exceptúan de este numeral aquellos beneficiarios que soliciten el Crédito para cursar programas de prosecución de estudios conducentes a título profesional de educador o profesor;
3. Quienes sean titulares de dos o más títulos técnicos de nivel superior. Si el estudiante cuenta con un título técnico de nivel superior, sólo podrá acceder al Crédito si se matricula en una carrera o programa de estudios conducente a título profesional conducente o no a una licenciatura;
4. Los estudiantes que hayan incurrido en deserción o eliminación académica más de una vez, sea en la misma carrera o programa de estudios o en otro distinto; y
5. Los estudiantes que hayan cambiado de carrera o programa de estudios o institución más de una vez. Cuando el beneficiario del Crédito ingrese a una carrera o programa de estudios o institución distintas por primera vez, y la carrera o programa de estudios cursada previamente haya sido

financiada con el Crédito, se le financiará el período de duración nominal de la nueva carrera o programa de estudios en la cual se matricule, con la extensión a que se refiere el inciso final del artículo 8, descontándosele de éste el tiempo cursado previamente en la otra institución o carrera o programa de estudios, según corresponda.

§ 2. DE LOS REQUISITOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Artículo 12.- Requisitos para las instituciones de educación superior. El Crédito podrá financiar los estudios en las instituciones de educación superior que cumplan con los siguientes requisitos:

1. Que seleccione a sus alumnos de primer año por criterios académicos basados en principios de no discriminación arbitraria, objetivos y transparentes;
2. Que se encuentren acreditadas de acuerdo a lo dispuesto en la ley N° 20.129²⁰.
3. Que hayan otorgado oportunamente las garantías a que se refiere el artículo siguiente.

Artículo 13.- Garantía de las instituciones de educación superior por incumplimiento de pago. Las instituciones de educación superior serán responsables ante la Administradora por un porcentaje del monto del Crédito otorgado en todos aquellos casos en que el beneficiario haya incurrido en deserción y exista incumplimiento en el pago de las cuotas del Crédito.

Para efecto de lo dispuesto en el inciso anterior, las instituciones de educación superior que accedan al Crédito deberán garantizar los riesgos de deserción y de no solución de la deuda por los beneficiarios en el período de pago correspondiente, a través de instrumentos financieros suscritos a favor de la Administradora.

Artículo 14.- Cobertura de la garantía. La garantía por concepto de deserción deberá cubrir:

²⁰ Ley N° 20.129 que Establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

1. El 90% del monto total o acumulado por concepto de capital e intereses del Crédito respecto de los estudiantes que deserten durante el primer año académico de la carrera o programa de estudios.
2. El 70% del monto total o acumulado por concepto de capital e intereses del Crédito respecto de los estudiantes que deserten durante el segundo año académico de la carrera o programa de estudios.
3. El 60% del monto total o acumulado por concepto de capital e intereses del Crédito respecto de los estudiantes que deserten a partir del tercer año académico de la carrera o programa de estudios.

La Administradora cobrará a la institución de educación superior garante las cuotas morosas del beneficiario del crédito hasta completar el monto de la garantía señalada en el inciso anterior, a partir del momento en que el Crédito se haga exigible por deserción y se haya incumplido el pago de al menos cuatro cuotas de forma consecutiva.

El pago de la garantía habilitará a la institución de educación superior a repetir contra el deudor moroso por el monto señalado en el inciso anterior, una vez concluido el periodo de pago establecido en el artículo 21 u operada la extinción del Crédito.

Adicionalmente, en el caso de beneficiarios del Crédito egresados, las instituciones de educación superior garantizarán el no pago de la deuda por un monto equivalente al cincuenta por ciento del monto del Crédito que exceda el arancel regulado. La Administradora cobrará a la institución de educación superior garante aquella parte de la garantía correspondiente a las cuotas morosas del deudor hasta completar el monto de esta garantía, una vez que el deudor se encuentre con al menos cuatro cuotas consecutivas en mora, de acuerdo al procedimiento establecido en el reglamento. El monto de esta garantía disminuirá proporcionalmente a la amortización del capital del Crédito, o hasta que éste se haya cancelado íntegramente por el deudor.

El reglamento definirá la constitución, determinación y forma de cálculo de los instrumentos financieros mediante los cuales se caucionará el cumplimiento de las garantías establecidas en el artículo 13 y en este artículo.

Artículo 15.- Adhesión de las instituciones de educación superior. Adherirán al Crédito, por el solo ministerio de la ley, las instituciones de educación superior estatales.

Por su parte, las instituciones de educación superior reconocidas por el Estado no señaladas en el inciso precedente, que deseen adherir al Crédito y cumplan con los requisitos señalados en el artículo 12, deberán solicitarlo ante la Administradora, hasta el 30 de abril de cada año. La Administradora tendrá un plazo de treinta días corridos, contado desde la fecha de la solicitud, para verificar el cumplimiento de los requisitos. Acogida la solicitud, el financiamiento se otorgará a contar del año siguiente y se entenderá

que la institución lo mantiene mientras cumpla con los requisitos de la presente ley. Con todo, a más tardar el 30 de abril de cada año, podrá manifestar ante la Administradora su voluntad de no continuar adhiriendo al Crédito, lo que se materializará el año siguiente a dicha comunicación.

Si una institución de educación superior reconocida por el Estado optare por renunciar a la adhesión al Crédito, aquello no será impedimento para la renovación de los créditos otorgados con anterioridad a la comunicación, de acuerdo a la duración y condiciones dispuestas en la presente ley.

Artículo 16.- Remanente del Arancel Real. En aquellos casos en que las ayudas estatales en su conjunto no logren abarcar la totalidad del arancel real de la respectiva carrera o programa de estudios de una institución de educación superior, ésta deberá asegurar a sus beneficiarios del Crédito que se encuentren dentro de los primeros seis deciles socioeconómicos, el financiamiento del cien por ciento del remanente que quede sin cubrir considerando la situación particular de cada alumno. Lo anterior podrá realizarse a través de becas y/o créditos propios de cada institución.

Si para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior las instituciones de educación superior otorgan créditos a sus alumnos, éstos se sujetarán a lo dispuesto en los artículos siguientes.

El pago a las instituciones de educación superior de los créditos que éstas otorguen de acuerdo a los incisos anteriores sólo será exigible cuando el beneficiario del Crédito haya pagado al Fisco, a lo menos, el cincuenta por ciento del monto del Crédito recibido de aquel, incluyendo capital e intereses.

Las becas referidas en el inciso primero serán deducibles de conformidad a lo establecido en el artículo 31²¹ de la Ley de Impuesto a la Renta.

Artículo 17.- Financiamiento del remanente con Créditos de la institución de educación superior. Las instituciones de educación superior que opten por cumplir la obligación establecida en el artículo precedente, otorgando créditos propios, deberán asegurar en el instrumento en que consten dichos créditos, que ellos estarán sujetos a los mismos términos y condiciones que el Crédito otorgado en virtud de la presente ley, en lo relativo a tasa, plazo y fecha de devengamiento, y que se pagarán de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior.

Las obligaciones establecidas en el inciso anterior sólo serán exigibles a las instituciones de educación superior que admitan alumnos beneficiarios del Crédito.

21 Véase en el Anexo I

Artículo 18.- Información Semestral. Las instituciones de educación superior deberán enviar al menos semestralmente a la Administradora las nóminas de sus alumnos matriculados y sus egresados, por carrera o programas de estudios, identificándolos con su Rol Único Nacional, distinguiendo aquellos que recibieron el Crédito a que se refiere esta ley, y los beneficiados con el financiamiento a que se refiere el artículo 16. Además, deberán remitir dicha información al Ministerio de Educación.

Artículo 19.-Infracciones y Sanciones. Corresponderá a la Superintendencia de Educación Superior fiscalizar que las instituciones de educación superior cumplan con las obligaciones y requisitos establecidos en la presente ley, aplicando, en su caso, las sanciones de acuerdo a lo dispuesto en los siguientes incisos.

El incumplimiento de la obligación de las instituciones de educación superior de concurrir al otorgamiento de los créditos y/o becas y bajo los términos y condiciones a que se refieren los artículos 16 y 17, se considerará como infracción grave.

Por su parte, conllevará el término de la adhesión del Crédito a que se refiere el artículo 15, el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 12.

TÍTULO III

Normas para la exigibilidad, plazo y excepciones al pago del Crédito

§ 1. DEL PLAZO PARA LA EXIGIBILIDAD Y DEL PLAZO ORIGINAL DE PAGOS.

Artículo 20.- Exigibilidad del Crédito. El Crédito será exigible una vez transcurridos dieciocho meses desde el egreso del beneficiario de la carrera o programa de estudios correspondiente, o bien una vez que incurra en deserción.

Será responsabilidad de cada beneficiario del Crédito efectuar el pago correspondiente a la Administradora. En el caso del trabajador dependiente, éste estará sujeto a la retención mensual por parte de su empleador, en los términos del párrafo 5 de este Título.

Artículo 21.- Modalidad de Pago. El Crédito se pagará hasta en 180 cuotas mensuales y sucesivas a contar del momento en que se haga exigible. La cantidad total de cuotas será determinada por la Administradora según el monto adeudado considerando capital e intereses, al momento en que la deuda se haga exigible, dando origen así al Plazo Original de pagos.

El pago de la cuota mensual del Crédito deberá efectuarse dentro de los primeros diez días de cada mes, a partir del mes siguiente a la fecha de exigibilidad del crédito señalada en el inciso primero del artículo anterior.

Este plazo será de días corridos prorrogándose hasta el día hábil siguiente si el último día recayere en sábado, domingo o festivo.

Artículo 22.- Prepago. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el beneficiario podrá prepagar el Crédito en cualquier tiempo, en todo o en parte, sin que dicho pago anticipado quede afecto a cobros o comisiones de ningún tipo. La Administradora establecerá los términos y condiciones que regulen estos prepagos.

Artículo 23.- Modificación en el pago de la cuota. Las cuotas calculadas de acuerdo con el artículo 21 podrán ser modificadas en cualquier tiempo a petición del deudor a la Administradora, ajustándose su valor, reduciéndose o suspendiéndose su pago, en los casos previstos en el párrafo siguiente.

§ 2. SUSPENSIÓN DEL PAGO O AJUSTE DE LA CUOTA POR CLÁUSULA DE CONTINGENCIA, SU DURACIÓN Y EFECTOS

Artículo 24.- Suspensión del pago mensual o ajuste de la cuota por Cláusula de Contingencia. Los beneficiarios del Crédito, que no se encuentren en los casos contemplados en los artículos 26 y 27, podrán suspender sus pagos o ajustar sus cuotas mensuales determinadas de acuerdo al artículo 21, aplicando las cláusulas de contingencia señaladas en los incisos siguientes.

Los beneficiarios del Crédito podrán ajustar el monto de la cuota calculada conforme al artículo 21, si dicho monto excede del 10% de su renta mensual. En este caso, la cuota se reducirá de manera que no exceda de ese 10%.

Los beneficiarios del Crédito podrán suspender sus pagos mensuales determinados de acuerdo con el artículo 21, si su renta mensual es inferior al sueldo mínimo.

Las cuotas cuyos pagos se hubiesen ajustado o suspendido de acuerdo con los incisos anteriores no modificarán el Plazo Original de pago.

Con todo, para quienes hagan uso de las contingencias señaladas en este artículo, la Administradora recalculará un nuevo valor de la cuota a pagar por el beneficiario del Crédito. Este nuevo valor será aquel que extinga la deuda dentro del Plazo Original que le corresponda. La Administradora determinará la forma y periodicidad en las cuales se efectuará este recálculo.

El deudor podrá hacer uso de los derechos que le confiere este artículo durante toda la vigencia del periodo de pago.

El reglamento definirá la forma cómo se deberán acreditar las circunstancias a que se refiere este artículo, por parte de los beneficiarios que requieran ajustar o suspender la obligación de pago del Crédito, por alguna de las causales indicadas.

Artículo 25.- Duración y efectos de la Cláusula de Contingencia. La duración del ajuste o de la suspensión del pago de la cuota se establecerá por la Administradora. Con todo, no podrá durar más de 6 meses, a cuyo término el beneficiario del Crédito podrá solicitarla nuevamente.

Si un deudor proporcionare declaraciones y antecedentes maliciosamente incompletos o falsos para solicitar la suspensión del pago o el ajuste de la cuota, deberá enterar las cantidades correspondientes a las cuotas no pagadas en virtud de la suspensión o de la parte rebajada de la cuota original. A estas cantidades, debidamente reajustadas, se les aplicará una tasa de interés penal mensual igual al interés máximo convencional por cada mes o fracción de mes en que dichos pagos debieron haber ocurrido.

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiese corresponderle de acuerdo al artículo 210²² del Código Penal.

22 Artículo 210°, vigente:

ART. 210.

El que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio

§ 3. CAUSALES DE INTERRUPCIÓN DEL PAGO DEL CRÉDITO Y DEL RECALCULO ANUAL POR AJUSTE O SUSPENSIÓN DE PAGO.

Artículo 26.- Interrupción por estudios de magister o doctorado. Si un beneficiario se encontrare cursando estudios de magister o doctorado en Chile o en el extranjero y su renta mensual fuere inferior a 8 UTM, podrá solicitar la interrupción del cómputo del Plazo Original y del período de pago del Crédito por el tiempo que acredite el cumplimiento de ambas circunstancias, debiendo informar aquello a la Administradora.

La interrupción del cómputo del Plazo Original y del período de pago del Crédito traerán como consecuencia una extensión del Plazo Original y del período de pago por el número de meses de vigencia de la interrupción. Sin perjuicio de lo anterior, la interrupción no podrá exceder de dos años en el caso que el beneficiario esté cursando un programa de magister y no podrá exceder de cinco años en el caso que el beneficiario esté cursando un programa de doctorado.

La interrupción y la reanudación del pago interrumpido de conformidad con los incisos precedentes se registrarán por lo que disponga el reglamento.

Artículo 27.- Interrupción por estudios de carrera conducente a título profesional.

El estudiante que cuente con título técnico de nivel superior que haya sido financiado por el Crédito creado por la presente ley, al que se le otorgare un nuevo Crédito para financiar una carrera conducente a un título profesional, con o sin licenciatura, se registrará por las siguientes reglas:

1. Si el primer Crédito otorgado aún no se ha hecho exigible, se acumularán ambos créditos, iniciándose el período de pago una vez que el segundo se haga exigible.
2. Si el periodo de pago del primer Crédito se ha iniciado, este se interrumpirá, acumulándose su saldo insoluto al segundo Crédito, debiendo pagarse ambos una vez que se haga exigible el último.

Artículo 28.- Reliquidación anual en caso de ajuste o suspensión de pago de cuotas del Crédito. La Administradora realizará una vez al año una reliquidación de los pagos mensuales a los que se les haya aplicado lo dispuesto en el artículo 24, con la información proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República.

y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.

Para estos efectos, el Servicio de Impuestos Internos proporcionará la información relativa a las rentas anuales del beneficiario del Crédito. Respecto de la información proporcionada no regirá lo establecido en el inciso segundo del artículo 35²³ del Código Tributario.

Todo el personal de la Administradora a que se refiere el Título V deberá guardar reserva de la información a que se refiere el inciso anterior, debiendo abstenerse de utilizarla en beneficio propio o de terceros. La infracción a esta obligación constituirá una vulneración a la probidad en los términos del artículo 160, N°1²⁴ del Código del Trabajo, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan. El personal de la Administradora que haga uso de la información señalada en el inciso anterior para un fin distinto al establecido en esta ley será sancionado con las penas de presidio menor en cualquiera de sus grados.

La Administradora comunicará electrónicamente al titular del Crédito, en la forma que señale el reglamento, el saldo insoluto adeudado correspondiente al año y la correspondencia entre los pagos anticipados mensuales y la exigibilidad del Crédito establecida en el artículo 20. Si el monto enterado ha sido inferior al obligado, el beneficiario del Crédito deberá completar su pago dentro de diez días corridos contados desde la comunicación, plazo que se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente si dicho término expirare un sábado, domingo o festivo. Transcurrido aquel plazo sin que se haga efectivo el pago, el beneficiario del Crédito se constituirá en deudor moroso. La Tesorería General de la República deberá efectuar el cobro del monto moroso aplicando los mismos trámites que rigen el procedimiento establecido en el título V libro III²⁵ del Código Tributario.

23 Inciso segundo, del artículo 35°, vigente:

El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales.

24 Numeral 1, del artículo 160°, vigente:

Art. 160. El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales:

1. -Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a continuación se señalan:
 - a) Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones;
 - b) Conductas de acoso sexual;
 - c) Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier trabajador que se desempeñe en la misma empresa;
 - d) Injurias proferidas por el trabajador al empleador;
 - e) Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se desempeña, y
 - f) Conductas de acoso laboral.

25 Establece el cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero.

§ 4. TÉRMINO DEL PLAZO ORIGINAL Y CONDICIONES PARA LA EXTENSIÓN DEL CRÉDITO.

Artículo 29.- Extinción de la deuda. Respecto de aquellos beneficiarios del Crédito que no registren cuotas vencidas y no pagadas, pagada que sea la cuota final según sea el Plazo Original, y la reliquidación del artículo 28 cuando corresponda, la deuda será extinguida.

Cualquier saldo por concepto de capital e intereses que se mantenga después del pago de la última cuota será condonado.

Artículo 30.- Extensión del plazo de pago. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, deberán reprogramar el saldo pendiente de pago de su deuda, aquellos beneficiarios que registren cuotas vencidas y no pagadas a la fecha de vencimiento del Plazo Original correspondiente, o bien, de éste modificado o extendido de acuerdo a los artículos 23, 26 y 27. En este caso el plazo de pago se extenderá por hasta un máximo de 60 meses, y se calculará un nuevo valor base de las cuotas adicionales, las que quedarán sujetas a las mismas reglas aplicables en cuanto a su ajuste y suspensión de acuerdo a esta ley.

Extendido que sea el plazo de acuerdo al inciso anterior, si a la fecha de pago de la última cuota del plazo así extendido, todavía existiese algún saldo pendiente de pago de la deuda, como consecuencia de haberse ajustado o suspendido el pago de las cuotas en cualquiera de los casos establecidos en el artículo 24, la deuda se extinguirá cualquiera sea su monto.

Las condonaciones señaladas en este artículo y en el artículo precedente, deberán constar en el acta de la sesión de directorio de la Administradora correspondiente al mes siguiente a aquel en que hayan tenido lugar dichas condonaciones. Las cantidades condonadas no se afectarán con el impuesto establecido por el artículo 21²⁶ de la Ley sobre Impuesto a la Renta y serán deducibles de conformidad al artículo 31 N°3²⁷ del mismo cuerpo legal para la Administradora y como ingreso no renta para el beneficiario. Las condonaciones estarán exceptuadas de la insinuación del pago de los impuestos que regula la ley N°16.271 de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones cuyo texto se encuentra refundido coordinado y sistematizado por el decreto con fuerza de ley N°1, de 2000, del Ministerio de Justicia.

26 Véase en el Anexo I

27 Véase en el Anexo I

§ 5. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR Y DEL DEUDOR COMO TRABAJADOR DEPENDIENTE

Artículo 31.- Obligaciones del empleador. Sin perjuicio de la responsabilidad del pago a que se refiere inciso segundo del artículo 20, el empleador se encontrará obligado a retener y pagar la cuota del Crédito del deudor que trabaje bajo su dependencia.

Artículo 32.- Información del deudor a su empleador, a la Administradora y a la Tesorería General de la República. El beneficiario del Crédito deberá informar por escrito, en la forma señalada en el reglamento, a cada uno de sus empleadores la circunstancia de ser deudor del Crédito que establece esta ley hasta que se extinga la deuda. Asimismo, mientras se mantenga vigente la deuda, deberá informar por escrito a la Administradora y a la Tesorería General de la República, en la forma señalada en el reglamento, los datos de su empleador o empleadores, así como cualquier cambio de éstos, o la pérdida de la condición de trabajador dependiente. Si el beneficiario del Crédito no cumple con las obligaciones señaladas en los incisos precedentes, deberá pagar una multa a beneficio fiscal ascendiente a 2 UTM.

Artículo 33.- Sobre el pago y sanciones a los empleadores dedeudores. En el caso de los trabajadores dependientes, las cuotas del Crédito deberán ser deducidas de su remuneración por su empleador, retenidas, pagadas a la Administradora o a la Tesorería General de la República, si corresponde, y transferidas por ésta a la Administradora. En este caso, el beneficiario del Crédito se encontrará liberado de la obligación de pago de las cuotas, aunque estas sumas no hayan sido enteradas por el empleador, de manera que las acciones de cobro deberán dirigirse exclusivamente en contra de este último, de conformidad al procedimiento de cobro establecido en el Título V Libro III²⁸ del Código Tributario.

Si el empleador no efectúa la deducción correspondiente o habiéndola efectuado no enterare los fondos, deberá pagar a la Tesorería General de la República una multa a beneficio fiscal equivalente a 0,5 UTM por cada cuota no pagada.

Las sumas no enteradas devengarán además el interés penal mensual igual al interés máximo convencional por cada mes o fracción de mes, en caso de atraso en el pago del total de las cuotas adeudadas por dicho concepto. La Tesorería General de la República compensará respecto de cualquier cantidad que el Fisco

28 Establece el cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero.

deba pagar al empleador, aquellas cantidades que éste se encontrare obligado a retener y no hubiese enterado dentro del plazo establecido por esta ley.

Artículo 34.- Deducción y no pago. Los beneficiarios del Crédito a quienes el empleador les haya deducido y no pagado, total o parcialmente, las respectivas cuotas mensuales, podrán requerir a la Tesorería General de la República la liberación de la retención de la devolución de impuestos a la renta efectuada en virtud de lo dispuesto en el artículo 35, en la forma que señale el reglamento, si probaren que su empleador les ha efectuado la deducción o que existen juicios pendientes de cobro en contra del referido empleador. En estos casos se considerará deudor al empleador. La liberación de la devolución a que se refiere este artículo alcanzará sólo hasta el monto de lo probado.

§ 6. RETENCIÓN DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS O BENEFICIOS FISCALES

Artículo 35.- Retención de devolución de impuestos o beneficios fiscales. La Administradora informará a la Tesorería General de la República la nómina de los deudores con cuotas vencidas y no pagadas del Crédito.

La Tesorería General de la República retendrá la devolución de cualquier impuesto o entrega de beneficio fiscal de cualquier naturaleza, cuando se adeude el Crédito para efectos de compensar el saldo en mora de las cuotas mensuales vencidas e imputar dicho monto al pago del mismo. Si el monto retenido fuere inferior a la cantidad que le corresponde pagar al deudor, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto. Las cantidades retenidas deberán ser transferidas a la Administradora.

La Tesorería General de la República, en representación de la Administradora, estará facultada para realizar las acciones de cobranza judicial y extrajudicial que sean procedentes respecto de los créditos de los que es titular la Administradora y que hayan sido otorgados de acuerdo a la presente ley.

Las acciones de cobranza que ejerza la Tesorería General de la República, por sí o a través de terceros, se someterán al procedimiento de cobro establecido en el Título V Libro III²⁹ del Código Tributario.

29 Establece el cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero.

Artículo 36.- Notificación de retenciones por saldo en mora. La Tesorería General de la República notificará por carta certificada a los deudores que serán sujetos de retención de devolución de impuestos por el saldo en mora de las cuotas vencidas del Crédito.

Una vez notificado, el deudor tendrá un plazo de 10 días para solicitar a la Tesorería la aclaración de su situación en aquellos casos en que éste considere que ha operado algún modo de extinguir las obligaciones, o bien, que el monto que se consigna como adeudado no corresponde a lo que efectivamente se debe.

La Tesorería tendrá 5 días para resolver la solicitud de aclaración que se le presente. Una vez resuelta y, cualquiera sea la resolución adoptada, deberá ser notificada al deudor respectivo por carta certificada dirigida al domicilio que para estos efectos se hubiere señalado en la misma solicitud.

En caso de que la Tesorería rechace la solicitud por no encontrarse extinguida la deuda, por ser correcto el monto consignado como adeudado o por cualquier otra causa legal, estará facultada para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere, los montos del Crédito que se encontraren impagos e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

En contra de la resolución de la Tesorería General de la República que rechace la solicitud señalada en el inciso tercero, el deudor podrá deducir acción de reclamación ante el tribunal ordinario correspondiente. Dicha reclamación se tramitará de acuerdo al decreto con fuerza de ley N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que Fija el Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías.

TITULO IV

Mecanismos, atribuciones y funciones de los organismos intervinientes en la administración y otorgamiento del Crédito, para la correcta y oportuna solución del Crédito

Artículo 37.- Función de la Tesorería General de la República. La Tesorería General de la República prestará el apoyo que requiera la Administradora, recaudando para ésta en caso de que sea necesario. Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio de Tesorerías estará a cargo de la cobranza del Crédito en caso de los deudores con cuotas vencidas y no pagadas del mismo, según lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 38.- Función del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación verificará el cumplimiento de los requisitos para adherir al sistema de financiamiento solidario respecto de las instituciones de educación superior establecidos en el artículo 12 y de los estudiantes señalados en el artículo 9. Para ello, podrá solicitar información a dichas instituciones, así como a los organismos públicos que correspondan. Con todo, dicho Ministerio podrá solicitar a la Administradora la verificación del cumplimiento de los requisitos antes indicados, proporcionándole la información necesaria.

Artículo 39.- Función del Ministerio de Hacienda. Para efectos de esta ley, serán obligaciones del Ministerio de Hacienda comunicar a la Administradora, mediante oficio, el marco presupuestario para el año calendario en el cual regirá, así como otras condiciones financieras que deberá observar para la administración, conforme a los preceptos de este cuerpo legal.

Artículo 40.- Incentivos al buen comportamiento. La Administradora establecerá los términos y condiciones que regulen los incentivos necesarios que induzcan a los beneficiarios a tener un buen comportamiento crediticio e ir saldando la deuda en forma eficaz y sostenible. Éstos serán públicos y estarán a disposición de los interesados.

TITULO V

De la Administración del Sistema de Financiamiento Solidario

Artículo 41.- Operación del Financiamiento de los Créditos. La Administradora se sujetará a las siguientes reglas generales para la operación del financiamiento de los créditos:

- a) Recibirá anualmente, de los Ministerios de Educación y de Hacienda, la información necesaria para la generación de los créditos.

Sin perjuicio de lo anterior, y hasta que se hayan extinguido las renovaciones de los créditos generados bajo la ley N° 20.027³⁰, el Ministerio de Educación proporcionará la información a Ingesa y ésta se la entregará a la Administradora.

Ingesa apoyará a la Administradora, en caso que ésta lo requiera, en el plazo señalado en el inciso anterior.

- b) Depositará directamente en las instituciones de educación superior que cumplan los requisitos señalados en el párrafo 2 del Título II, los recursos correspondientes a los Créditos que se hubiesen otorgado a los beneficiarios que hayan suscrito contratos de Crédito.
- c) Informará a la Tesorería General de la República la nómina de los deudores con cuotas vencidas y no pagadas del Crédito para que ejerza la acción de cobro de las cuotas que correspondan.
- d) Requerirá de las instituciones de educación superior la constitución de las garantías exigidas por esta ley, custodiarlas y hacerlas efectivas cuando corresponda.
- e) Podrá requerir información a las instituciones de educación superior sobre el egreso o deserción de los beneficiarios del Crédito.

Artículo 42.- Función de la Administradora. Para efectos de asegurar el adecuado funcionamiento del sistema de financiamiento solidario establecido en esta ley, serán obligaciones de la Administradora las siguientes:

- 1. Otorgar y financiar los créditos para los estudiantes que acrediten el cumplimiento de los requisitos ante el Ministerio de Educación para tales efectos. Para ello deberá suscribir los contratos respectivos, de acuerdo a las condiciones establecidas en esta ley.
- 2. Recaudar los recursos del Crédito y determinar sus formas de cobro, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37 de la presente ley.
- 3. Registrar y coordinar la cobranza por parte del Servicio de Tesorerías de los créditos generados con cargo a esta ley.
- 4. Administrar las nóminas de estudiantes que suscriban el Crédito. Dichas nóminas estarán disponibles para el público general y contendrán información ordenada sobre el financiamiento de los estudios de educación superior respecto de cada uno de los estudiantes, incluyendo su condición de mora si correspondiere, hasta la total extinción del Crédito, momento en el que la información deberá ser eliminada de la nómina. Este registro deberá cumplir con la regulación establecida en la ley N° 19.628³¹.

30 Ley N° 20.027, que Establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior.

31 Ley N° 19.628, Sobre Protección de la Vida Privada.

5. Informar a los beneficiarios del Crédito sobre el monto de su saldo insoluto y las cuotas que les corresponda pagar.
6. Requerir información a las instituciones de educación superior sobre el egreso o deserción de los beneficiarios del Crédito, procesarla y aplicar las medidas resultantes.

Sin perjuicio de lo anterior, y hasta que se hayan extinguido las renovaciones de los créditos generados bajo la ley N° 20.027³², Ingresará proporcionará la información a la Administradora.
7. Actuar coordinadamente y procurar la unidad de acción con la Tesorería General de la República, el Servicio de Impuestos Internos y demás organismos públicos, además de las entidades que recaudan cotizaciones previsionales, para efectos de la recaudación de los pagos y de la cobranza administrativa y judicial.
8. Certificar la extinción del Crédito, de acuerdo a las reglas establecidas en la presente ley.
9. Elaborar balances trimestrales que den cuenta de los recursos efectivamente otorgados como créditos y de los recuperados del conjunto de beneficiarios, los que deberán ser remitidos al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Educación dentro de los treinta días siguientes al término del trimestre respectivo.
10. Elaborar y publicar en su sitio web los balances antes señalados.

Artículo 43.- Facultad de solicitud de información del Crédito. La Administradora estará facultada para exigir los datos personales contenidos en la base de datos a que se refiere el artículo 34³³

32 Ley N° 20.027, que Establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior.

33 Artículo 34°, vigente:

Artículo 34.- La Sociedad Administradora deberá mantener una Base de Datos de los trabajadores sujetos al Seguro, con los registros necesarios para la operación del Seguro que incluirá el registro general de información del trabajador, los movimientos de las cuentas individuales por cesantía y el archivo de documentos.

La Sociedad Administradora tendrá la responsabilidad de efectuar el tratamiento de la Base de Datos de los trabajadores sujetos al Seguro, sólo para cumplir las funciones definidas en la ley y aquellas que establezca la Superintendencia mediante una norma de carácter general. El objeto único de la Base de Datos será servir de soporte a las funciones de la Sociedad, y para la realización de estudios de carácter técnico por parte de la Superintendencia.

Para efectos de esta ley, se entenderá por tratamiento de datos de los trabajadores sujetos al Seguro, cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar datos o utilizarlos en cualquier otra forma.

La Superintendencia, mediante una norma de carácter general, establecerá los mecanismos necesarios para garantizar el control y resguardo de la Base de Datos.

Extinguido el contrato de administración por cualquier causa, la Sociedad Administradora que estuviere prestando el servicio, deberá transferir a la nueva sociedad adjudicataria la Base de Datos que permita la continuidad del funcionamiento del Seguro.

El que, durante el período de vigencia del Contrato de Administración o con posterioridad a él, haga uso de la información incluida en la Base de Datos que mantenga la Sociedad Administradora para un fin distinto al establecido en esta ley, será sancionado con las penas de presidio menor en cualquiera de sus grados, sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan de conformidad con lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

La Sociedad Administradora que durante el traspaso de la concesión provoque un daño no fortuito a la Base de Datos que mantenga, o niegue u obstaculice su entrega o la otorgue en forma incompleta, será sancionada de conformidad con lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

de la ley N°19.728 y la información que fuere necesaria para el ejercicio de sus funciones a la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía.

El personal de la Administradora deberá guardar absoluta reserva y secreto de la información de que tomen conocimiento y abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de terceros, y le serán aplicadas las sanciones establecidas en el inciso sexto del artículo 34³⁴ de la ley N°19.728.

Artículo 44.- Sobre el patrimonio de la sociedad respecto de la entrega de los créditos de esta ley. Los créditos generados por la Administradora de acuerdo a lo señalado en la presente ley comprometerán el patrimonio de la misma. Sin perjuicio de ello, el Fisco realizará los siguientes aportes de capital a la Administradora:

- a) Un aporte fiscal de hasta US\$ 7.915.800.000.- (siete mil novecientos quince millones ochocientos mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional, proveniente de la liquidación de activos del Tesoro Público. Dicho aporte se materializará en una o más transferencias que se realizarán desde la entrada en vigencia de esta ley y hasta el 31 de diciembre de 2028.
- b) Aportes extraordinarios de capital con cargo a los créditos generados por la ley N°20.027³⁵ que a la fecha de publicación de esta ley se encontraren en poder del Fisco.

El Fisco podrá efectuar retiros de este capital una vez que el monto anual que la Administradora perciba por los créditos que se encuentren en su período de pago exceda el monto de los nuevos créditos que sea necesario otorgar ese mismo año, situación que deberá ocurrir por un período de al menos dos años consecutivos

Artículo 45.- Transferencias del Sector Público. La Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año podrá contemplar transferencias a la Administradora, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- a) Que la Administradora haya informado las necesidades de recursos de acuerdo a las pérdidas originadas por la administración, operación y financiamiento del Crédito, dando cuenta de sus

34 Véase nota al inciso primero del artículo 43 del proyecto de ley.

35 Ley N° 20.027 Establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior.

implicancias sobre la sustentabilidad de la Administradora. Dicho informe deberá haber sido revisado por un evaluador independiente; y

- b) Que el monto máximo de las transferencias solicitadas sea el mínimo necesario para que la Administradora no registre variaciones patrimoniales por efecto de las mismas pérdidas.

Con todo, el reglamento establecerá la manera de determinar los pagos que por concepto de administración deban efectuarse al administrador.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 46.- Autorízase al Ministro de Hacienda para que, mediante uno o más decretos expedidos bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”, efectúe los aportes de capital de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44.

Artículo 47.- Mientras no se encuentren vigentes la o las resoluciones exentas que establezcan los valores regulados de arancel a que se hace mención el párrafo 2° del Título V³⁶ de la ley N° 21.091 sobre Educación Superior, se aplicará lo dispuesto en los incisos primero, segundo y tercero del artículo trigésimo octavo transitorio de la precitada ley.

Artículo 48.- Derógase el artículo 122³⁷ de la ley N° 21.091 sobre Educación Superior.

Artículo 49.- El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio de Educación. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la Partida Presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiera financiar con esos recursos. En los años siguientes, los recursos se consultarán en la Ley de Presupuestos del Sector Público respectiva.

36 Véase Anexo II

37 Artículo 122°, que se deroga:

Artículo 122.- Derógase la ley N° 20.027 (que Establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior), que establece Normas para el Financiamiento de Estudios de Educación Superior, a partir del 1 de enero de 2019. Dicha derogación entrará en vigencia siempre que comience a regir otro mecanismo de financiamiento de estudios de educación superior que lo reemplace, el cual será administrado por el Estado y será propuesto por el Presidente de la República a través de un proyecto de ley que presentará durante el año 2018.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero.- La presente ley, salvo las excepciones que se contemplan, entrará en vigencia 180 días después de que se encuentre plenamente constituida la Administradora, o a la fecha de su publicación en el Diario Oficial, si esta última fecha fuere posterior. Con todo, a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a su entrada en vigencia, se comenzará a otorgar el Crédito de que trata esta ley.

Artículo segundo.- Sin perjuicio de lo señalado en el inciso segundo del artículo 15 de esta ley, las instituciones de educación superior tendrán un plazo de 30 días para adherirse al Crédito, contados desde la entrada en vigencia de la presente ley.

PÁRRAFO 1.- Tratamiento de los deudores del crédito con garantía estatal regulado en la ley N° 20.027.

Artículo tercero.- Traspaso de los deudores CAE al Crédito. Los deudores de los créditos que se hubiesen otorgado de acuerdo a la ley N° 20.027, podrán sujetarse a las condiciones y reglas de pago del Crédito creado por la presente ley, en la medida que, en cada caso, cumplan las siguientes condiciones:

1. Los deudores que se encuentren al día en el pago de sus cuotas, deberán suscribir declaración expresa con la Administradora, de la voluntad de someter su deuda contraída en virtud de la ley N° 20.027³⁸, a las condiciones y reglas de pago establecidas para el Crédito. En este caso, el monto total adeudado se traspasará a un nuevo Crédito regulado por la presente ley y su pago quedará comprendido en el Plazo Original, el que corresponderá al número de meses que les restase para pagar su deuda contraída en virtud de la ley N° 20.027³⁹ o al Plazo Original determinado conforme al artículo 21 si este último fuera inferior. Respecto de tales deudas, la Administradora podrá novarlas o prepagarlas en calidad de mandataria, entre otras acciones destinadas a concretar el traspaso a las nuevas condiciones y reglas del nuevo Crédito, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 11 de la presente ley.

38 Ley N° 20.027 que Establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior.

39 Ley N° 20.027 que Establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior.

2. Los deudores que se encuentren con cuotas vencidas y no pagadas, y sin garantías ejecutadas, podrán acceder a las condiciones y reglas de pago establecidas para el Crédito, debiendo suscribir previamente la declaración indicada en el número anterior. En este caso, el monto total adeudado, vencido y por vencer, se traspasará al Crédito y su pago quedará comprendido en el Plazo Original. Los deudores deberán, además, y por única vez, pagar un cargo de transferencia de su deuda que no podrá ser superior a 5 UTM, el que será fijado por la Administradora.

En la tabla de desarrollo del Crédito correspondiente, se hará la imputación del pago de las cuotas vencidas y no pagadas del CAE, a las cuotas finales del Plazo Original a que se refiere el artículo 21 según determine la Administradora.

3. Los deudores que se encuentren en un proceso ejecutivo de cobro en su contra por incumplimiento de su obligación de pago, encontrándose con la garantía autorizada a pago, o bien, cuenten con certificado de cumplimiento de las obligaciones de administración de la institución financiera, podrán solicitar un convenio de pago con la Tesorería General de la República, sujeto a las condiciones del Crédito y reglas de pago de la presente ley, el que será administrado por la Administradora en coordinación con la Tesorería General de la República. Para acceder al convenio de pago, los deudores que se encuentren en la situación descrita en este numeral deberán, además, y por única vez, pagar un cargo de transferencia de su deuda que no podrá ser superior a 5 UTM, el que será fijado por la Administradora.

En la tabla de desarrollo del Crédito correspondiente, se hará la imputación del pago de las cuotas morosas del CAE, a las cuotas finales del Plazo Original a que se refiere el artículo 21 según determine la Administradora. Transcurrido treinta y seis meses de estar al día en el pago de las cuotas del convenio suscrito con el Servicio de Tesorerías, el Fisco podrá adquirir los créditos remanentes a las instituciones financieras, pudiendo negociarlos con sus titulares de manera individual o agregada.

4. Los deudores que se encuentren en cualquiera de las situaciones señaladas en los números anteriores, que se matriculen en una nueva carrera o programa de estudios y que cumplan los requisitos establecidos en esta ley, podrán financiarla con el Crédito, imputando el pago de las cuotas morosas del CAE, si las hubiere, a las cuotas finales del Plazo Original a que se refiere el artículo 21 según determine la Administradora.
5. Sin perjuicio de lo anterior, aquellos estudiantes titulares de dicho crédito que se encuentren cursando sus estudios en una institución de educación superior que no participe en el Sistema de Financiamiento Solidario, podrán renovar su crédito de acuerdo a lo establecido la ley N° 20.027. En este caso, una vez que su deuda se haga exigible, podrán realizar la solicitud señalada en el numeral 1 del presente artículo.
6. Los titulares del crédito otorgado de acuerdo a la ley N° 20.027⁴⁰, que aún se encuentren cursando sus estudios y lo hagan en instituciones de educación superior que participen en el Sistema de Financiamiento Solidario, podrán acceder a él, en la medida que acepten de manera expresa

40 Ley N° 20.027 que Establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior.

ante la Administradora, suscribiendo la documentación establecida en el Título II de esta ley, que respecto a la deuda contraída en virtud del crédito concedido de conformidad a la ley N° 20.027⁴¹, se le aplicarán todas las condiciones establecidas en la presente ley.

7. La Administradora podrá resolver cualquier otra situación distinta de aquellas reguladas en los numerales precedentes.

Artículo cuarto.- No Suscripción de Nuevas Líneas de Crédito con Garantía Estatal.

A partir de la fecha en que se comience a otorgar el Crédito de conformidad al artículo primero transitorio, no se podrán suscribir nuevos contratos de línea de crédito conforme a la ley N° 20.027.

Con todo, los contratos, instrumentos, derechos y obligaciones, celebrados y contraídos por las personas o entidades públicas y privadas, en el marco de la ley N° 20.027, en calidad de, entre otras, administradoras, garantes, aseguradoras o financistas, se mantendrán plenamente vigentes hasta la total extinción de las obligaciones de pago de los deudores que permanezcan sujetos a la ley N° 20.027.

PÁRRAFO 2° Reglas para el Fondo Solidario de Crédito Universitario regulado por la ley N° 19.287⁴².

Artículo quinto.- Regulación del Fondo Solidario de Crédito Universitario. A partir de la fecha en que se comience a otorgar el Crédito de conformidad al artículo primero transitorio, no se otorgarán nuevos créditos de aquellos establecidos en la ley N° 19.287, sin perjuicio de las renovaciones de aquellos ya otorgados.

Asimismo, a contar de esa fecha no se realizarán los aportes estatales al Fondo Solidario del Crédito Universitario, con excepción de los aportes que sea necesario realizar a los fondos de las instituciones creadas por la ley N° 20.842⁴³. Las instituciones de educación superior que administren dichos fondos sólo podrán destinarlos al otorgamiento de los créditos a que se refiere el artículo 16 de esta ley, y a la renovación de aquellos créditos otorgados con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia.

41 Ley N° 20.027 que Establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior.

42 Ley N° 19.287, que Modifica Ley 18.591 y establece normas sobre fondos solidarios de crédito universitario.

43 Ley N° 20.842, que Crea las universidades estatales de la Región de O'Higgins y de la Región de Aysén.

Los deudores del fondo solidario de crédito universitario podrán acceder al Crédito en los términos y condiciones señalados en la presente Ley.

PÁRRAFO 3° Función transitoria de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores Creada por la ley N° 20.027⁴⁴

Artículo sexto.- Obligaciones y atribuciones de Ingesa. Para efectos de esta ley, serán obligaciones y atribuciones de Ingesa las siguientes:

- 1) Definir e implementar el proceso de otorgamiento del crédito y selección de los beneficiarios del mismo de acuerdo a lo dispuesto en esta ley. Para lo anterior, deberá coordinarse con el Ministerio de Educación, el cual estará a cargo del proceso de solicitud del Crédito.
- 2) Verificar el cumplimiento de los requisitos para adherir al sistema de financiamiento solidario establecidos, respecto de las instituciones de educación superior, en el artículo 12 y de los estudiantes, en el artículo 9. Para ello, podrá solicitar información a dichas instituciones, así como a los organismos públicos que correspondan, en coordinación con el Comité de Coordinación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior a que se refiere el artículo 3 de la ley N° 20.129. El Ministerio de Educación le proporcionará la información a que se refiere el artículo 10.
- 3) Requerir información a las instituciones de educación superior sobre el egreso o deserción de los beneficiarios del crédito.
- 4) Actuar coordinadamente y procurar la unidad de acción con la Administradora, para efectos del adecuado funcionamiento del Crédito.
- 5) Proporcionar al público general información detallada sobre las normas, procedimientos y criterios, utilizados en el Crédito.
- 6) Las demás funciones y atribuciones que la ley le encomiende.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Educación en coordinación con Ingesa, podrá verificar los requisitos que señala el numeral 2, como, asimismo, remitir la demás información que indica este artículo.

44 Ley N° 20.027 que Establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior.

Las funciones anteriormente señaladas las ejercerá hasta que se hayan extinguido las renovaciones de los créditos generados bajo la ley N° 20.027. A contar de esa fecha, la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores creada por la ley N° 20.027 se suprimirá por el solo ministerio de la ley. Sin perjuicio de lo anterior, y a contar de esta misma fecha, las funciones de administración que se deriven de los créditos otorgados en virtud de la ley N° 20.027 que se mantengan vigentes, serán ejercidas por la Administradora.

Artículo séptimo.- Los trabajadores de Ingresa que a la fecha de su supresión se encuentren prestando servicios, podrán pasar a formar parte del personal de la Administradora del sistema de financiamiento solidario, en cuyo caso el traspaso se realizará sin solución de continuidad y sin disminución de sus remuneraciones.

Para efecto de los beneficios indemnizatorios que les pudieran corresponder, en caso de que cesen en funciones por aplicación del inciso primero del artículo 161⁴⁵ del Código del Trabajo, se le computarán tanto los años servidos en la referida Comisión como los trabajados en la Administradora del Crédito.

Para el cálculo de la indemnización se aplicará el límite máximo establecido en el inciso segundo del artículo 163⁴⁶ y el establecido en inciso final del artículo 172⁴⁷, ambos del Código del Trabajo, sin que les sea aplicable lo previsto en el artículo 7° transitorio⁴⁸ de dicho Código.

Artículo octavo.- A contar de la fecha de supresión por el solo ministerio de la ley, de la Comisión Administradora del Sistema de Crédito para Estudios Superiores creada por la ley N° 20.027, todos sus bienes muebles serán transferidos al Fisco.

Lo dispuesto en el inciso anterior se formalizará mediante decreto supremo del Ministerio de Educación, el que individualizará los bienes que se transfieran, incluidos los vehículos motorizados.

Para el efecto de practicar las anotaciones en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, se efectuará las inscripciones y las anotaciones que procedan con el solo mérito de una copia autorizada del decreto señalado en el inciso anterior.”.

45 Véase en Anexo III

46 Véase en Anexo III

47 Véase en Anexo III.

48 Véase en Anexo III

ANEXO I

Artículos del Decreto Ley N° 824, que aprueba texto que indica de la Ley sobre Impuesta Renta, citados en el proyecto de ley.

Artículo 21.- Las sociedades anónimas, los contribuyentes del número 1 del artículo 58, los empresarios individuales, comunidades y sociedades de personas que declaren sus rentas efectivas de acuerdo a un balance general según contabilidad completa, deberán declarar y pagar conforme a los artículos 65, número 1, y 69 de esta ley, un impuesto único de 40%, que no tendrá el carácter de impuesto de categoría, el que se aplicará sobre:

- i. Las partidas del número 1 del artículo 33, que correspondan a retiros de especies o a cantidades representativas de desembolsos de dinero que no deban imputarse al valor o costo de los bienes del activo. La tributación señalada se aplicará, salvo que estas partidas resulten gravadas conforme a lo dispuesto en el literal i) del inciso tercero de este artículo;
- ii. Las cantidades que se determinen por aplicación de lo dispuesto en los artículos 17, número 8, inciso cuarto; 35, 36, inciso segundo; 38, 41 E, 70 y 71 de esta ley, y aquellas que se determinen por aplicación de lo dispuesto en los incisos tercero al sexto del artículo 64, y en el artículo 65 del Código Tributario, según corresponda, y
- iii. Las cantidades que las sociedades anónimas destinen a la adquisición de acciones de su propia emisión, de conformidad a lo previsto en el artículo 27 A de la ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, cuando no las hayan enajenado dentro del plazo que establece el artículo 27 C de la misma ley. Tales cantidades se reajustarán de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el mes que antecede a aquél en que se efectuó la adquisición y el mes anterior al de cierre del ejercicio en que debieron enajenarse dichas acciones.

No se afectarán con este impuesto, ni con aquel señalado en el inciso tercero siguiente: (i) los gastos anticipados que deban ser aceptados en ejercicios posteriores; (ii) el impuesto de Primera Categoría; el impuesto único de este artículo, el impuesto establecido en el número 2, del artículo 38 bis y el impuesto territorial, todos ellos pagados; (iii) los intereses, reajustes y multas pagados al Fisco, municipalidades y a organismos o instituciones públicas creadas por ley, y (iv) las partidas a que se refiere el número 12° del artículo 31 y las patentes mineras, en ambos casos en la parte que no puedan ser deducidas como gasto.

Los contribuyentes de los impuestos global complementario o adicional, que sean propietarios, comuneros, socios o accionistas de empresas, comunidades o sociedades que determinen su renta efectiva de acuerdo a un balance general según contabilidad completa, deberán declarar y pagar los impuestos referidos, según corresponda, sobre las cantidades que se señalan a continuación en los literales i) al iv), impuestos cuyo importe se incrementará en un monto equivalente al 10% de las citadas cantidades. Esta tributación se aplicará en reemplazo de la establecida en el inciso primero:

i) Las partidas del número 1 del artículo 33, que corresponden a retiros de especies o a cantidades representativas de desembolsos de dinero que no deban imputarse al valor o costo de los bienes del activo, cuando hayan beneficiado al propietario, socio, comunero o accionista. En estos casos, el Servicio podrá determinar fundadamente el beneficio que tales sujetos han experimentado. Cuando dichas cantidades beneficien a dos o más accionistas, comuneros o socios y no sea posible determinar el monto del beneficio que corresponde a cada uno de ellos, se afectarán con la tributación establecida en este inciso, en proporción a su participación en el capital o en las utilidades de la empresa o sociedad

ii) Los préstamos que la empresa, establecimiento permanente, la comunidad o sociedad respectiva, con excepción de las sociedades anónimas abiertas, efectúe a sus propietarios, comuneros, socios o accionistas contribuyentes de los impuestos global complementario o adicional, en la medida que el Servicio determine de manera fundada que constituyen un retiro, remesa o distribución, encubierta, que resulte imputada a cantidades afectas a dichos impuestos cuando así corresponda de acuerdo a lo señalado en el artículo 14. La tributación de este inciso se aplicará sobre el total de la cantidad prestada, reajustada según el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor entre el mes anterior al del otorgamiento del préstamo y el mes que antecede al término del ejercicio, deduciéndose debidamente reajustadas todas aquellas cantidades que el propietario, socio o accionista beneficiario haya restituido a la empresa o sociedad a título de pago del capital del préstamo y sus reajustes durante el ejercicio respectivo. Para estos efectos el Servicio considerará, entre otros elementos, las utilidades de balance acumuladas en la empresa a la fecha del préstamo y la relación entre éstas y el monto prestado; el destino y destinatario final de tales recursos; el plazo de pago del préstamo, sus prórrogas o renovaciones, tasa de interés u otras cláusulas relevantes de la operación, circunstancias y elementos que deberán ser expresados por el Servicio, fundadamente, al determinar que el préstamo es un retiro, remesa o distribución encubierto de cantidades afectas a la tributación de este inciso.

Las sumas que establece este numeral se deducirán en la empresa, comunidad o sociedad acreedora, de las cantidades a que se refieren el número 4.-, de la letra A), del artículo 14 y el número 2.- de la letra B), de dicho artículo, en la misma forma que los retiros, remesas o distribuciones.

iii) El beneficio que represente el uso o goce, a cualquier título, o sin título alguno, que no sea necesario para producir la renta, de los bienes del activo de la empresa o sociedad respectiva. Para estos efectos, se presumirá de derecho que el valor mínimo del beneficio será del 10% del valor del bien determinado para fines tributarios al término del ejercicio; del 20% del mismo valor en el caso de automóviles, station wagons y vehículos similares; y del 11% del avalúo fiscal tratándose de bienes raíces, o en cualquiera de los casos señalados, el monto equivalente a la depreciación anual mientras sea aplicable, cuando represente una cantidad mayor, cualquiera que sea el período en que se hayan utilizado los bienes en el ejercicio o en la proporción que justifique fehacientemente el contribuyente.

Del valor mínimo del beneficio calculado conforme a las reglas anteriores podrán rebajarse las sumas efectivamente pagadas que correspondan al período por el uso o goce del bien, aplicándose a la diferencia la tributación establecida en este inciso tercero.

En el caso de contribuyentes que realicen actividades en zonas rurales, no se aplicará la tributación establecida en el inciso tercero al beneficio que represente el uso o goce de los activos de la empresa ubicados en tales sitios. Tampoco se aplicará dicha tributación al beneficio que represente el uso o goce de los bienes de la empresa destinados al esparcimiento de su personal, o el uso de otros bienes por éste, si no fuere habitual. En caso que dicho uso fuere habitual, se aplicará el impuesto establecido en el inciso primero de este artículo, que será de cargo de la empresa, comunidad o sociedad propietaria y el beneficio por dicho uso se calculará conforme a las reglas precedentes.

Cuando el uso o goce de un mismo bien se haya concedido simultáneamente a más de un socio, comunero o accionista y no sea posible determinar la proporción del beneficio que corresponde a cada uno de ellos, éste se determinará distribuyéndose conforme a las reglas que establece el artículo 14, letra A), para la atribución de rentas. En caso que el uso o goce se haya conferido por un período inferior al año comercial respectivo, circunstancia que deberá ser acreditada por el beneficiario, ello deberá ser considerado para efectos del cálculo de los impuestos.

Las sumas que establece este numeral no se deducirán en la empresa, comunidad o sociedad respectiva, de las cantidades a que se refieren el número 4.- de la letra A) del artículo 14, y el número 2.- de la letra B) del mismo artículo.

- iv) En el caso que cualquier bien de la empresa, comunidad o sociedad sea entregado en garantía de obligaciones, directas o indirectas, del propietario, comunero, socio o accionista, y ésta fuera ejecutada por el pago total o parcial de tales obligaciones, se aplicará la tributación de este párrafo al propietario, comunero, socio o accionista cuyas deudas fueron garantizadas de esta forma. En este caso, la tributación referida se calculará sobre la garantía ejecutada, según su valor corriente en plaza, conforme a lo dispuesto en el artículo 64 del Código Tributario.

Las sumas que establece este numeral, hasta el valor tributario del activo que resulta ejecutado, se deducirán en la empresa, comunidad o sociedad respectiva, de las cantidades a que se refieren el número 4.- de la letra A) del artículo 14, y el número 2.- de la letra B), de dicho artículo, en la misma forma que los retiros, remesas o distribuciones.

Para la aplicación de la tributación establecida en el inciso tercero, se entenderá que las partidas señaladas en el literal i) benefician, que el préstamo se ha efectuado, que el beneficio señalado en el literal iii) se ha conferido o que se han garantizado obligaciones al propietario, comunero, socio o accionista, según sea el caso, cuando dichas cantidades tengan como beneficiario de las partidas señaladas en el literal i), deudor del préstamo, beneficiario por el uso o goce señalado en el literal iii), o sujeto cuyas deudas se han garantizado, a sus respectivos cónyuges, hijos no emancipados legalmente, o bien a cualquier persona relacionada con aquellos, en los términos del artículo 100 de la ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, salvo el cónyuge o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad de las personas señaladas en la letra c) de este último artículo, y además se determine que el beneficiario final, en el caso de los préstamos y garantías es el propietario, socio, comunero o accionista respectivo.

Artículo 31°.- La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30°, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio. No se deducirán los gastos incurridos en la adquisición, mantención o explotación de bienes no destinados al giro del negocio o empresa, de los bienes de los cuales se aplique la presunción de derecho a que se refiere el literal iii) del inciso tercero del artículo 21 y la letra f), del número 1°, del artículo 33, como tampoco en la adquisición y arrendamiento de automóviles, station wagons y similares, cuando no sea éste el giro habitual, y en combustible, lubricantes, reparaciones, seguros y, en general, todos los gastos para su mantención y funcionamiento. Tampoco procederá la deducción de gastos incurridos en supermercados y comercios similares, cuando no correspondan a bienes necesarios para el desarrollo del giro habitual del contribuyente. No obstante, procederá la deducción de los gastos respecto de los vehículos señalados, cuando el Director los califique previamente de necesarios, a su juicio exclusivo. Tratándose de los gastos incurridos en supermercados y comercios similares, podrá llevarse a cabo su deducción cuando no excedan de 5 unidades tributarias anuales durante el ejercicio respectivo, siempre que se cumpla con todos los requisitos que establece el presente artículo. Cuando tales gastos excedan del monto señalado, igualmente procederá su deducción cumpliéndose la totalidad de los requisitos que establece este artículo, siempre que previo a presentar la declaración anual de impuesto a la renta, se informe al Servicio, en la forma que establezca mediante resolución, el monto en que se ha incurrido en los referidos gastos, así como el nombre y número de rol único tributario de él o los proveedores.

Sin perjuicio de lo indicado en el inciso precedente, los gastos incurridos en el extranjero se acreditarán con los correspondientes documentos emitidos en el exterior de conformidad a las disposiciones legales del país respectivo, siempre que conste en ellos, a lo menos, la individualización y domicilio del prestador del servicio o del vendedor de los bienes adquiridos según corresponda, la naturaleza u objeto de la operación y la fecha y monto de la misma. El contribuyente deberá presentar una traducción al castellano de tales documentos cuando así lo solicite el Servicio de Impuestos Internos. Aun en el caso que no exista el respectivo documento de respaldo, la Dirección Regional podrá aceptar la deducción del gasto si a su juicio éste es razonable y necesario para la operación del contribuyente, atendiendo a factores tales como la relación que exista entre las ventas, servicios, gastos o los ingresos brutos y el desembolso de que se trate de igual o similar naturaleza, de contribuyentes que desarrollen en Chile la misma actividad o una semejante.

Respecto de las cantidades a que se refiere el artículo 59, cuando se originen en actos o contratos celebrados con partes directa o indirectamente relacionadas de la entidad local respectiva en los términos del artículo 41 E, sólo procederá su deducción como gasto en el año calendario o comercial de su pago, abono en cuenta o puesta a disposición. Para que proceda su deducción, se requiere que se haya declarado y pagado el respectivo impuesto adicional, salvo que tales cantidades se encuentren exentas o no gravadas con el citado tributo, ya sea por ley o por aplicación de un convenio para evitar la doble tributación internacional. Adicionalmente, para que sea procedente su deducción deberán cumplir con los requisitos que establece este artículo, en cuanto sean aplicables. Lo dispuesto en este inciso, no obsta a la aplicación de lo dispuesto en el citado artículo 41 E.

Especialmente procederá la deducción de los siguientes gastos, en cuanto se relacionen con el giro del negocio:

- 1°.- Los intereses pagados o devengados sobre las cantidades adeudadas, dentro del año a que se refiere el impuesto. No se aceptará la deducción de intereses y reajustes pagados o adeudados, respecto de créditos o préstamos empleados directa o indirectamente en la adquisición, mantención y/o explotación de bienes que no produzcan rentas gravadas en esta categoría.

Con todo, los intereses y demás gastos financieros que conforme a las disposiciones de este artículo cumplan con los requisitos para ser deducidos como gastos, que provengan de créditos destinados a la adquisición de derechos sociales, acciones, bonos y, en general, cualquier tipo de capital mobiliario, podrán ser deducidos como tales.

- 2°.- Los impuestos establecidos por leyes chilenas, en cuanto se relacionen con el giro de la empresa y siempre que no sean los de esta ley, con excepción del impuesto establecido en el artículo 64 bis en el ejercicio en que se devengue, ni de bienes raíces, a menos que en este último caso no proceda su utilización como crédito y que no constituyan contribuciones especiales de fomento o mejoramiento. No procederá esta rebaja en los casos en que el impuesto haya sido sustituido por una inversión en beneficio del contribuyente.

- 3°.- Las pérdidas sufridas por el negocio o empresa durante el año comercial a que se refiere el impuesto, comprendiendo las que provengan de delitos contra la propiedad.

Podrán, asimismo, deducirse las pérdidas de ejercicios anteriores, siempre que concurren los requisitos del inciso precedente.

Las pérdidas deberán imputarse a las rentas o cantidades que perciban, a título de retiros o dividendos afectos a los impuestos global complementario o adicional, de otras empresas o sociedades, sumas que para estos efectos deberán previamente incrementarse en la forma señalada en el inciso final del número 1° del artículo 54 y en los artículos 58 número 2) y 62.

Si las rentas referidas en el párrafo precedente no fueren suficientes para absorberlas, la diferencia deberá imputarse al ejercicio inmediatamente siguiente conforme a lo señalado y así sucesivamente.

En el caso que las pérdidas absorban total o parcialmente las utilidades percibidas en el ejercicio, el impuesto de primera categoría pagado sobre dichas utilidades incrementadas, se considerará como pago provisional en aquella parte que proporcionalmente corresponda a la utilidad absorbida, y se aplicarán las normas de reajustabilidad, imputación o devolución que señalan los artículos 93 a 97.

Las pérdidas se determinarán aplicando a los resultados del balance las normas relativas a la determinación de la renta líquida imponible contenidas en este párrafo y su monto se reajustará, cuando deba imputarse a los años siguientes, de acuerdo con el porcentaje de variación experimentada por el índice de precios al consumidor en el período comprendido entre el último

día del mes anterior al del cierre del ejercicio comercial en que se generaron las pérdidas y el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio en que proceda su deducción.

Con todo, las sociedades con pérdidas que en el ejercicio hubieren sufrido cambio en la propiedad de los derechos sociales, acciones o del derecho a participación en sus utilidades, no podrán deducir las pérdidas generadas antes del cambio de propiedad de los ingresos percibidos o devengados con posterioridad a dicho cambio. Ello siempre que, además, con motivo del cambio señalado o en los doce meses anteriores o posteriores a él la sociedad haya cambiado de giro o ampliado el original a uno distinto, salvo que mantenga su giro principal, o bien al momento del cambio indicado en primer término, no cuente con bienes de capital u otros activos propios de su giro de una magnitud que permita el desarrollo de su actividad o de un valor proporcional al de adquisición de los derechos o acciones, o pase a obtener solamente ingresos por participación, sea como socio o accionista, en otras sociedades o por reinversión de utilidades. Para este efecto, se entenderá que se produce cambio de la propiedad en el ejercicio cuando los nuevos socios o accionistas adquieran o terminen de adquirir, directa o indirectamente, a través de sociedades relacionadas, a lo menos el 50% de los derechos sociales, acciones o participaciones. Lo dispuesto en este inciso no se aplicará cuando el cambio de propiedad se efectúe entre empresas relacionadas, en los términos que establece el artículo 100 de la ley N° 18.045.

- 4°.- Los créditos incobrables castigados durante el año, siempre que hayan sido contabilizados oportunamente y se hayan agotado prudencialmente los medios de cobro.

Las provisiones y castigos de los créditos incluidos en la cartera vencida de los bancos e instituciones financieras, de acuerdo a las instrucciones que impartan en conjunto la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y el Servicio de Impuestos Internos.

Las instrucciones de carácter general que se impartan en virtud del inciso anterior, serán también aplicables a las remisiones de créditos riesgosos que efectúen los bancos y sociedades financieras a sus deudores, en la parte en que se encuentren afectos a provisiones constituídas conforme a la normativa sobre clasificación de la cartera de créditos establecida por la Superintendencia de Bancos e Instituciones financieras.

Las normas generales que se dicten deberán contener, a lo menos, las siguientes condiciones:

- a) Que se trate de créditos clasificados en las dos últimas categorías de riesgo establecidas para la clasificación de cartera, y
- b) Que el crédito de que se trata haya permanecido en alguna de las categorías indicadas a lo menos por el período de un año, desde que se haya pronunciado sobre ella la Superintendencia.

Lo dispuesto en este número se aplicará también a los créditos que una institución financiera haya adquirido de otra, siempre que se cumpla con las condiciones antedichas.

- 5°.- Una cuota anual de depreciación por los bienes físicos del activo inmovilizado a contar de su utilización en la empresa, calculada sobre el valor neto de los bienes a la fecha del balance respectivo, una vez efectuada la revalorización obligatoria que dispone el artículo 41°.

El porcentaje o cuota correspondiente al período de depreciación dirá relación con los años de vida útil que mediante normas generales fije la Dirección y operará sobre el valor neto total del bien. No obstante, el contribuyente podrá aplicar una depreciación acelerada, entendiéndose por tal aquella que resulte de fijar a los bienes físicos del activo inmovilizado adquiridos nuevos o internados, una vida útil equivalente a un tercio de la fijada por la Dirección o Dirección Regional. No podrán acogerse al régimen de depreciación acelerada los bienes nuevos o internados cuyo plazo de vida útil total fijada por la Dirección o Dirección Regional sea inferior a tres años. Los contribuyentes podrán en cualquiera oportunidad abandonar el régimen de depreciación acelerada, volviendo así definitivamente al régimen normal de depreciaciones a que se refiere este número. Al término del plazo de depreciación del bien, éste deberá registrarse en la contabilidad por un valor equivalente a un peso, valor que no quedará sometido a las normas del artículo 41°, y que deberá permanecer en los registros contables hasta la eliminación total del bien motivada por la venta, castigo, retiro u otra causa. Tratándose de bienes que se han hecho inservibles para la empresa antes del término del plazo de depreciación que se les haya asignado, podrá aumentarse al doble la depreciación correspondiente.

En todo caso, cuando se aplique el régimen de depreciación acelerada, sólo se considerará para los efectos de lo dispuesto en el artículo 14, la depreciación normal que corresponde al total de los años de vida útil del bien. La diferencia que resulte en el ejercicio respectivo entre la depreciación acelerada y la depreciación normal, sólo podrá deducirse como gasto para los efectos de primera categoría.

La Dirección Regional, en cada caso particular, a petición del contribuyente o del Comité de Inversiones Extranjeras, podrá modificar el régimen de depreciación de los bienes cuando los antecedentes así lo hagan aconsejable.

Para los efectos de esta ley no se admitirán depreciaciones por agotamiento de las sustancias naturales contenidas en la propiedad minera, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 30.

- 5° bis Para los efectos de lo dispuesto en el número 5° precedente, los contribuyentes que en los 3 ejercicios anteriores a aquel en que comience la utilización del bien, sea que se trate de bienes nuevos o usados, registren un promedio anual de ingresos del giro igual o inferior a 25.000 unidades de fomento, podrán depreciar los bienes del activo inmovilizado considerando una vida útil de un año. Los contribuyentes que no registren operaciones en los años anteriores podrán acogerse a este régimen de depreciación siempre que tengan un capital efectivo no superior a 30.000 unidades de fomento, al valor que éstas tengan en el primer día del mes del inicio de las actividades. Si la empresa tuviere una existencia inferior a 3 ejercicios, el promedio se calculará considerando los ejercicios de existencia efectiva.

Los contribuyentes que, en los 3 ejercicios anteriores a aquel en que comience la utilización del bien, registren un promedio anual de ingresos del giro superior a 25.000 unidades de fomento y que no supere las 100.000, podrán aplicar el régimen de depreciación a que se refiere el párrafo precedente, para bienes nuevos o importados, considerando como vida útil del respectivo bien el equivalente a un décimo de la vida útil fijada por la Dirección o Dirección Regional, expresada

en años, despreciando los valores decimales que resulten. En todo caso, la vida útil resultante no podrá ser inferior a un año. Si la empresa tuviere una existencia inferior a 3 ejercicios, el promedio se calculará considerando los ejercicios de existencia efectiva.

Para efectos de determinar el promedio de ingresos anuales del giro conforme a lo dispuesto en los párrafos precedentes, los ingresos de cada mes se expresarán en unidades de fomento según el valor de ésta en el último día del mes respectivo.

En lo demás, se aplicarán las reglas que establece el número 5° anterior.

- 6°.- Sueldos, salarios y otras remuneraciones pagados o adeudados por la prestación de servicios personales, incluso las gratificaciones legales y contractuales, y asimismo, toda cantidad por concepto de gastos de representación. Las participaciones y gratificaciones voluntarias que se otorguen a los trabajadores se aceptarán como gasto cuando se paguen o abonen en cuenta y siempre que ellas sean repartidas a cada trabajador en proporción a los sueldos y salarios pagados durante el ejercicio, así como en relación a la antigüedad, cargas de familia u otras normas de carácter general y uniforme aplicables a todos los trabajadores de la empresa.

Tratándose de personas que por cualquiera circunstancia personal o por la importancia de su haber en la empresa, cualquiera sea la condición jurídica de ésta, hayan podido influir, a juicio de la Dirección Regional, en la fijación de sus remuneraciones, éstas sólo se aceptarán como gasto en la parte que, según el Servicio, sean razonablemente proporcionadas a la importancia de la empresa, a las rentas declaradas, a los servicios prestados y a la rentabilidad del capital, sin perjuicio de los impuestos que procedan respecto de quienes perciban tales pagos.

No obstante, se aceptará como gasto la remuneración del socio de sociedades de personas y socio gestor de sociedades en comandita por acciones, y las que se asigne el empresario individual, que efectiva y permanentemente trabajen en el negocio o empresa, hasta por el monto que hubiera estado afecto a cotizaciones previsionales obligatorias. En todo caso dichas remuneraciones se considerarán rentas del artículo 42, número 1.

Las remuneraciones por servicios prestados en el extranjero se aceptarán también como gastos, siempre que se acrediten con documentos fehacientes y sean a juicio de la Dirección Regional, por su monto y naturaleza, necesarias y convenientes para producir la renta en Chile.

- 6° bis Las becas de estudio que se paguen a los hijos de los trabajadores de la empresa, siempre que ellas sean otorgadas con relación a las cargas de familia u otras normas de carácter general y uniforme aplicables a todos los trabajadores de la empresa. En todo caso, el monto de la beca por cada hijo, no podrá ser superior en el ejercicio hasta la cantidad equivalente a una y media unidad tributaria anual, salvo que el beneficio corresponda a una beca para estudiar en un establecimiento de educación superior y se pacte en un contrato o convenio colectivo de trabajo, caso en el cual este límite será de hasta un monto equivalente a cinco y media unidades tributarias anuales.
- 7°.- Las donaciones efectuadas cuyo único fin sea la realización de programas de instrucción básica o media gratuitas, técnica, profesional o universitaria en el país, ya sean privados o fiscales, sólo en cuanto no excedan del 2% de la renta líquida imponible de la empresa o del 1,6°/°° del capital

propio de la empresa al término del correspondiente ejercicio. Esta disposición no será aplicada a las empresas afectas a la ley N° 16.624.

Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará también a las donaciones que se hagan a los Cuerpos de Bomberos de la República, Fondo de Solidaridad Nacional, Fondo de Abastecimiento y Equipamiento Comunitario, Servicio Nacional de Menores y a los Comités Habitacionales Comunales.

Las donaciones a que se refiere este número no requerirán del trámite de la insinuación y estarán exentas de toda clase de impuestos.

- 8°.- Los reajustes y diferencias de cambio provenientes de créditos o préstamos destinados al giro del negocio o empresa, incluso los originados en la adquisición de bienes del activo inmovilizado y realizable.
- 9°.- Los gastos de organización y puesta en marcha, los cuales podrán ser amortizados hasta en un lapso de seis ejercicios comerciales consecutivos contados desde que se generaron dichos gastos o desde el año en que la empresa comience a generar ingresos de su actividad principal, cuando este hecho sea posterior a la fecha en que se originaron los gastos.

En el caso de empresas cuyo único giro según la escritura de constitución sea el de desarrollar determinada actividad por un tiempo inferior a 6 años no renovable o prorrogable, los gastos de organización y puesta en marcha se podrán amortizar en el número de años que abarque la existencia legal de la empresa.

Cuando con motivo de la fusión de sociedades, comprendiéndose dentro de este concepto la reunión del total de los derechos o acciones de una sociedad en manos de una misma persona, el valor de la inversión total realizada en los derechos o acciones de la sociedad fusionada, resulte mayor al valor total o proporcional, según corresponda, que tenga el capital propio de la sociedad absorbida, determinado de acuerdo al artículo 41 de esta ley, la diferencia que se produzca deberá, en primer término, distribuirse entre todos los activos no monetarios que se reciben con motivo de la fusión cuyo valor tributario sea inferior al corriente en plaza. La distribución se efectuará en la proporción que represente el valor corriente en plaza de cada uno de dichos bienes sobre el total de ellos, aumentándose el valor tributario de éstos hasta concurrencia de su valor corriente en plaza o de los que normalmente se cobren o cobrarían en convenciones de similar naturaleza, considerando las circunstancias en que se realiza la operación. De subsistir la diferencia o una parte de ella, ésta se considerará como un activo intangible, sólo para los efectos de que sea castigado o amortizado a la disolución de la empresa o sociedad, o bien, al término de giro de la misma. Con todo, este activo intangible formará parte del capital propio de la empresa, y se reajustará anualmente conforme a lo dispuesto en el número 6 del artículo 41.

El valor de adquisición de los derechos o acciones a que se refiere el inciso anterior, para determinar la citada diferencia, deberá reajustarse según el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor entre el mes anterior al de la adquisición de los mismos y el mes anterior al del balance correspondiente al ejercicio anterior a aquel en que se produce la fusión.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 64 del Código Tributario, el Servicio podrá tasar fundadamente los valores de los activos determinados por el contribuyente en caso que resulten ser notoriamente superiores a los corrientes en plaza o los que normalmente se cobren o cobrarían en convenciones de similar naturaleza, considerando las circunstancias en que se realiza la operación. La diferencia determinada en virtud de la referida tasación, se considerará como parte del activo intangible, según lo señalado en este número.

- 10°.- Los gastos incurridos en la promoción o colocación en el mercado de artículos nuevos fabricados o producidos por el contribuyente, pudiendo el contribuyente prorratarlos hasta en tres ejercicios comerciales consecutivos, contados desde que se generaron dichos gastos.
- 11°.- Los gastos incurridos en la investigación científica y tecnológica en interés de la empresa aún cuando no sean necesarios para producir la renta bruta del ejercicio, pudiendo ser deducidos en el mismo ejercicio en que se pagaron o adeudaron o hasta en seis ejercicios comerciales consecutivos.
- 12°.- Los pagos que se efectúen al exterior por los conceptos indicados en el inciso primero del artículo 59 de esta ley, hasta por un máximo de 4% de los ingresos por ventas o servicios, del giro, en el respectivo ejercicio.

El límite establecido en el inciso anterior no se aplicará cuando, en el ejercicio respectivo, entre el contribuyente y el beneficiario del pago no exista o no haya existido relación directa o indirecta en el capital, control o administración de uno u otro. Para que sea aplicable lo dispuesto en este inciso, dentro de los dos meses siguientes al del término del ejercicio respectivo, el contribuyente o su representante legal, deberá formular una declaración jurada en la que señale que en dicho ejercicio no ha existido la relación indicada. Esta declaración deberá conservarse con los antecedentes de la respectiva declaración anual de impuesto a la renta, para ser presentada al Servicio cuando éste lo requiera. El que maliciosamente suscriba una declaración jurada falsa será sancionado en conformidad con el artículo 97, número 4, del Código Tributario.

Tampoco se aplicará el límite establecido en el inciso primero de este número, si en el país de domicilio del beneficiario de la renta ésta se grava con impuestos a la renta con tasa igual o superior a 30%. El Servicio de Impuestos Internos, de oficio o a petición de parte, verificará los países que se encuentran en esta situación.

Para determinar si los montos pagados por los conceptos indicados en el inciso primero de este número se encuentran o no dentro del límite allí indicado, deberán sumarse en primer lugar todos los pagos que resulten de lo dispuesto en los incisos segundo y tercero. Los restantes pagos se sumarán a continuación de aquéllos.

ANEXO II

Artículos de la Ley N° 21.091, sobre Educación Superior, citados en el proyecto de ley

PÁRRAFO 2° De los valores regulados de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación

Artículo 88.- Aquellas instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad se regirán por los valores regulados de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación para las carreras o programas de estudio señalados en el artículo 104.

Los valores de los aranceles regulados se determinarán en razón a "grupos de carreras" definidos por la Subsecretaría, los que corresponderán a conjuntos de carreras o programas de estudios que tengan estructuras de costo similares entre sí. Para ello, la Subsecretaría deberá considerar, al menos, los recursos que se requieran para impartirlas en razón de su estructura curricular, si se trata de carreras o programas de estudios profesionales o técnicos de nivel superior, los niveles, años y dimensiones de acreditación institucional con que cuentan las instituciones que las imparten, el tamaño de estas últimas y la región en que se imparten.

Los valores de los derechos básicos de matrícula corresponderán a un valor anual por estudiante, determinado según tipo de institución, es decir, universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Por su parte, los valores de los cobros por concepto de titulación o graduación corresponderán a un valor único por estudiante para uno o más grupos de carrera.

Los valores que trata este artículo se establecerán, cada cinco años, mediante resoluciones exentas del Ministerio de Educación, las que deberán ser visadas por el Ministro de Hacienda y publicarse en abril del año anterior al que se aplicarán dichos valores. Con todo, excepcionalmente y por razones fundadas, la Comisión de Expertos para la regulación de aranceles, establecida en el párrafo 3° siguiente, podrá solicitar a la Subsecretaría, a más tardar en octubre del año respectivo, que adelante el procedimiento de determinación de valores regulados de los que trata este artículo para uno o más grupos de carreras. La Subsecretaría podrá acoger la solicitud de la Comisión, caso en el cual enviará la propuesta del inciso primero del artículo 91 en el mes de abril del año siguiente; o rechazarla; en ambos casos de manera fundada.

Artículo 89.- El arancel regulado deberá dar cuenta del costo de los recursos materiales y humanos que sean necesarios y razonables, de acuerdo a lo previsto en las bases técnicas señaladas en el artículo 90, para impartir una carrera o programa de estudios de los grupos de carreras respectivos.

Dicho arancel deberá considerar tanto los costos anuales directos e indirectos como el costo anualizado de las inversiones en infraestructura, tales como laboratorios, servicios, edificios y uso de dependencias.

Artículo 90.- La Subsecretaría establecerá, mediante resolución exenta, visada por el Ministro de Hacienda, las bases técnicas para la realización del cálculo de los valores regulados de arancel, cobros por concepto de titulación o graduación para uno o más grupos de carreras y de los derechos básicos de matrícula. Estas bases contendrán el mecanismo de elaboración de los grupos de carreras, las hipótesis, criterios de cálculo, metodologías y procedimientos conforme a los cuales se determinarán los valores que trata este artículo.

Artículo 91.- Para la elaboración de las bases técnicas que trata el artículo anterior, la Subsecretaría deberá presentar una primera propuesta a la Comisión de Expertos para la regulación de aranceles, establecida en el párrafo 3° siguiente (en adelante "la Comisión"), dentro de los tres años siguientes a la publicación de la resolución exenta que determinó, para el último quinquenio vigente, los valores del arancel regulado, los derechos básicos de matrícula y cobros por titulación o graduación para el grupo o los grupos de carreras respectivos. Para la elaboración de la propuesta deberá considerar previamente un proceso de consulta a las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento regulado en este título y a las federaciones de estudiantes respectivas.

La propuesta presentada a la Comisión deberá adjuntar los antecedentes relacionados con el proceso de consulta señalado en el inciso anterior.

La Comisión deberá pronunciarse respecto de las bases técnicas dentro de tres meses desde la recepción de la propuesta. En el caso que la Comisión realice observaciones a la propuesta, éstas serán enviadas a la Subsecretaría, la que tendrá un plazo de dos meses para remitir una nueva propuesta que considere las modificaciones necesarias o dé respuesta fundada del rechazo de las observaciones.

La Comisión deberá pronunciarse respecto de esta nueva propuesta dentro del plazo de un mes contado desde su recepción. Este pronunciamiento será vinculante y podrá modificar de manera fundada la proposición de bases técnicas de la Subsecretaría, la que deberá dictar la resolución exenta de conformidad al último pronunciamiento de la Comisión.

La resolución exenta que establezca las bases técnicas de que trata este artículo deberá entrar en vigencia dentro del plazo de ocho meses contado desde la presentación de la propuesta a la que alude el inciso primero.

En caso que la Subsecretaría no presente las bases técnicas o que no se cumpla el plazo señalado en el inciso anterior, se aplicarán aquellas que se encuentren vigentes, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa según corresponda.

Artículo 92.- Dentro del plazo de siete meses contado desde la dictación de la resolución exenta que establece las bases técnicas, la Subsecretaría deberá presentar a la Comisión un informe que contenga el cálculo de los valores de los aranceles regulados, los derechos básicos de matrícula y los cobros por concepto de titulación o graduación, de conformidad a dichas bases técnicas, así como también las memorias de cálculo que correspondan. Asimismo, las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento regulado en este título podrán enviar a la Comisión sus apreciaciones al referido informe dentro del plazo de un mes contado desde su dictación.

La Comisión se pronunciará sobre el informe dentro del plazo de tres meses contado desde su recepción, pudiendo aprobarlo o realizarle observaciones fundadas, y debiendo tener a la vista las apreciaciones de las instituciones. Por su parte, la Subsecretaría, dentro del plazo de tres meses contado desde la recepción de dichas observaciones, deberá pronunciarse fundadamente sobre éstas, aprobándolas o rechazándolas, debiendo dictar la o las resoluciones exentas correspondientes.

Dichas resoluciones exentas deberán dictarse en el plazo establecido en el inciso cuarto del artículo 88.

Artículo 93.- Las resoluciones exentas señaladas en el artículo anterior deberán establecer, al menos, lo siguiente:

- a) La definición de el o los grupos de carreras que se hubieren determinado, debiendo explicitar las carreras o programas de estudios que se incluyan en cada grupo.
- b) Los valores de los aranceles regulados y cobros por concepto de titulación o graduación expresados en pesos por estudiante para cada grupo de carreras señalados en la letra a).
- c) Los valores de derechos básicos de matrícula, expresados en pesos por estudiante, de conformidad a la resolución vigente correspondiente a cada tipo de institución de educación superior, sin perjuicio de los reajustes que establece esta ley.

Artículo 94.- La Subsecretaría actualizará en octubre de cada año, mediante resolución exenta, los valores establecidos en las resoluciones vigentes de que trata el artículo anterior, de conformidad al reajuste que

señale la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año respectivo. Este reajuste aplicará para los aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación de todos los estudiantes matriculados en la institución respectiva.

Asimismo, en dicha resolución se deberá incorporar una nómina de las instituciones de educación superior que acceden al financiamiento institucional para la gratuidad, indicando los niveles, años y dimensiones de acreditación institucional vigente para dicho año, debiendo considerar para ello, aquellos del mes inmediatamente anterior a la fecha de dictación de la resolución.

En caso de que la acreditación institucional cambie durante la vigencia de la resolución regulada en este artículo, se deberán considerar los nuevos niveles, años y dimensiones de acreditación en la resolución para el año siguiente.

ANEXO III

Artículos del Código del Trabajo, citados en el proyecto de ley.

Art. 161. Sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes, el empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores. La eventual impugnación de las causales señaladas, se regirá por lo dispuesto en el artículo 168.

En el caso de los trabajadores que tengan poder para representar al empleador, tales como gerentes, subgerentes, agentes o apoderados, siempre que, en todos estos casos, estén dotados, a lo menos, de facultades generales de administración, y en el caso de los trabajadores de casa particular, el contrato de trabajo podrá, además, terminar por desahucio escrito del empleador, el que deberá darse con treinta días de anticipación, a lo menos, con copia a la Inspección del Trabajo respectiva. Sin embargo, no se requerirá esta anticipación cuando el empleador pague al trabajador, al momento de la terminación, una indemnización en dinero efectivo equivalente a la última remuneración mensual devengada. Regirá también esta norma tratándose de cargos o empleos de la exclusiva confianza del empleador, cuyo carácter de tales emane de la naturaleza de los mismos.

Las causales señaladas en los incisos anteriores no podrán ser invocadas con respecto a trabajadores que gocen de licencia por enfermedad común, accidente del trabajo o enfermedad profesional, otorgada en conformidad a las normas legales vigentes que regulan la materia.

Art. 163. Si el contrato hubiere estado vigente un año o más y el empleador le pusiere término en conformidad al artículo 161, deberá pagar al trabajador, la indemnización por años de servicio que las partes hayan convenido individual o colectivamente, siempre que ésta fuere de un monto superior a la establecida en el inciso siguiente.

A falta de esta estipulación, entendiéndose además por tal la que no cumpla con el requisito señalado en el inciso precedente, el empleador deberá pagar al trabajador una indemnización equivalente a treinta días de la última remuneración mensual devengada por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, prestados continuamente a dicho empleador. Esta indemnización tendrá un límite máximo de trescientos treinta días de remuneración.

La indemnización a que se refiere este artículo será compatible con la sustitutiva del aviso previo que corresponda al trabajador, según lo establecido en el inciso segundo del artículo 161 y en el inciso cuarto del artículo 162 de este Código.

Lo dispuesto en los incisos anteriores no se aplicará en el caso de terminación del contrato de los trabajadores de casa particular, respecto de los cuales regirán las siguientes normas:

- a) Tendrán derecho, cualquiera que sea la causa que origine la terminación del contrato, a una indemnización a todo evento que se financiará con un aporte del empleador, equivalente al 4,11% de la remuneración mensual imponible, la que se regirá, en cuanto corresponda, por las disposiciones de los artículos 165 y 166 de este Código, y
- b) La obligación de efectuar el aporte tendrá una duración de once años en relación con cada trabajador, plazo que se contará desde el 1° de enero de 1991, o desde la fecha de inicio de la relación laboral, si ésta fuere posterior. El monto de la indemnización quedará determinado por los aportes correspondientes al período respectivo, más la rentabilidad que se haya obtenido de ellos.

Art. 172. Para los efectos del pago de las indemnizaciones a que se refieren los artículos 163 bis, 168, 169, 170 y 171, la última remuneración mensual comprenderá toda cantidad que estuviere percibiendo el trabajador por la prestación de sus servicios al momento de terminar el contrato, incluidas las imposiciones y cotizaciones de previsión o seguridad social de cargo del trabajador y las regalías o especies valuadas en dinero, con exclusión de la asignación familiar legal, pagos por sobretiempo y beneficios o asignaciones que se otorguen en forma esporádica o por una sola vez al año, tales como gratificaciones y aguinaldos de navidad.

Si se tratare de remuneraciones variables, la indemnización se calculará sobre la base del promedio percibido por el trabajador en los últimos tres meses calendario.

Con todo, para los efectos de las indemnizaciones establecidas en este título, no se considerará una remuneración mensual superior a 90 unidades de fomento del último día del mes anterior al pago, limitándose a dicho monto la base de cálculo.

Art. 7.o Transitorio. Los trabajadores con contrato de trabajo vigente al 1.º de diciembre de 1990 y que hubieren sido contratados con anterioridad al 14 de agosto de 1981, tendrán derecho a las indemnizaciones que les correspondan conforme a ella, sin el límite máximo a que se refiere el artículo 163. Si dichos trabajadores pactasen la indemnización a todo evento señalada en el artículo 164, ésta tampoco tendrá el límite máximo que allí se indica.

La norma del inciso anterior se aplicará también a los trabajadores que con anterioridad al 14 de agosto de 1981 se encontraban afectos a la ley N.º 6.242, y que continuaren prestando servicios al 1º de diciembre de 1990.



